

ALLANAMIENTO: EFICACIA DEL ALLANAMIENTO DE UN LITISCONSORTE; DERECHO A LA PROPOSICIÓN Y PRÁCTICA DE PRUEBAS*

Fernando Gascón Inchausti

Fernando Pérez Bernáldez c. Julio y Rosa Pérez Bernáldez y Juan Matallana Martín.

Audiencia Provincial de Salamanca (no consta Sección).

Sentencia de 2 de octubre de 1996, recurso núm. 580/96.

Recurso de apelación frente a la Sentencia de 24 de julio de 1996 del Juzgado de Primera Instancia de Peñaranda de Bracamonte (juicio de cognición).

Ponente: Nieto Nafria.

Abogados: Gómez Aparicio, González Martín y Gordo Lorenzo.

Hechos y cuestiones jurídicas.

La parte actora demandó solidariamente a los hermanos Fernando, Julio y Rosa M^a Pérez Bernáldez el pago de la cantidad de 800.000 pesetas. El primero de los hermanos se allanó a la demanda, y solicitó la práctica de varias pruebas (en concreto, confesión del actor y de sus hermanos codemandados y documental). El Juzgado de Primera Instancia deniega el recibimiento del pleito a prueba, y -parece que “sin más trámite”- dicta sentencia acogiendo el allanamiento, en la que condena al allanado al pago íntegro de la cantidad, y absuelve a los otros dos litisconsortes que no se habían allanado. El condenado se alza en apelación contra la sentencia, alegando la nulidad de lo actuado por habersele negado “el derecho de prueba consecuente a su allanamiento”.

Fallo

La Sentencia de la Audiencia estima el recurso, declara la nulidad de la Sentencia de primera instancia y manda retrotraer el procedimiento al momento de práctica de la prueba.

COMENTARIO

Cuando menos de *peculiares* o *inusuales* pueden calificarse los hechos que motivaron esta Sentencia: demandados solidariamente tres hermanos, uno de ellos se allana a la demanda, y la Juez, “sin más trámite” -y, por tanto, sin recibir el pleito a prueba para la práctica de las propuestas por el allanado- dicta sentencia en la que condena exclusivamente al litisconsorte que se allanó y absuelve a los otros dos hermanos.

* Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca de 2 de octubre de 1996, publicado en *Tribunales de Justicia*, 1997-6, pp. 701 y sigs.

Nos hallamos ante la reclamación judicial de una obligación solidaria, supuesto que origina lo que un importante sector doctrinal viene denominando litisconsorcio pasivo *cuasinecesario*: no es preciso demandar a todos los obligados solidarios para que la litis se entienda regularmente constituida, pero demandados todos -o varios de ellos- el tratamiento ha de ser el de un litisconsorcio necesario.

Una vez sentado esto, debemos centrarnos en lo que es objeto principal del asunto debatido: la eficacia del allanamiento de un litisconsorte respecto de los demás y respecto de sí mismo. Como acertadamente señala la Sentencia de apelación, el allanamiento habría desplegado sin problemas su eficacia “si el allanado hubiere sido demandado único o la postura adoptada no resultara incompatible con la defendida por los demás codemandados o alguno de ellos”. En el supuesto de autos sucede lo contrario: tratándose de una obligación *in solidum*, necesariamente el allanamiento de uno solo de los codemandados resulta incompatible con la posición de los otros litisconsortes. En tales casos, el allanamiento será ineficaz y, como señala la Audiencia, “el proceso deberá continuar y cada parte se verá obligada a probar el contenido de sus asertos o alegaciones”. Recoge así la Sentencia de la Audiencia la línea doctrinal según la cual en los supuestos de inescindibilidad del fallo, las conductas perjudiciales de uno de los litisconsortes no pueden perjudicarle ni a él, ni a los otros codemandados. Erró, por tanto, la juzgadora de instancia al conceder eficacia al allanamiento. Y siendo ineficaz el allanamiento y no habiéndose practicado prueba alguna, las reglas sobre carga de la prueba deberían haber conducido a una sentencia absolutoria de la demanda respecto de todos los demandados, y no a la condena de uno sólo de ellos basada en un acto de disposición sobre el objeto del proceso que fue ineficaz. Más aún, la ineficacia del allanamiento debió haber impedido a la juzgadora dictar “sin más trámites” sentencia de fondo, sino que era necesaria la sustanciación de todo el proceso para llegar a tal fin.

Además, es preciso realizar ciertas puntualizaciones en relación con la ineficacia del allanamiento y el derecho a la proposición y práctica de pruebas. Si el allanamiento es válido, será vinculante sin más para el juzgador, de modo que no es necesaria la práctica de prueba: el fundamento de la sentencia de condena será la concurrente voluntad del actor y del demandado (o de los codemandados, si se trata de un litisconsorcio necesario) en virtud del principio dispositivo, y con independencia del grado de convicción interna del juzgador. Ahora bien, si el allanamiento no es eficaz, debe tenerse por inexistente: en consecuencia, el proceso debe continuar y la sentencia de condena sólo es posible si el juzgador llega al convencimiento de la certeza de los hechos alegados por el actor, para lo que será necesaria la fase de prueba.

En el supuesto de autos, demandados tres sujetos, y rigiéndose la situación por las reglas del litisconsorcio necesario, uno de ellos estima correcta la petición del actor, y en consecuencia pretende que se dicte sentencia de condena. Dicho de otro modo, es posible que uno solo de los litisconsortes se muestre conforme

con la pretensión del actor. Si el pronunciamiento es divisible, podrá allanarse por la parte que le corresponda. Ahora bien, si el pronunciamiento es indivisible - como parece suceder aquí-, su conformidad con la demanda no puede más que significar su voluntad de ser condenado *junto con los otros codemandados*. Pero su mera voluntad, sin el concurso de la de los demás codemandados, es insuficiente: ¿de qué medios dispone para lograr tal fin?. A nuestro juicio, no tiene más alternativa que dirigir su actividad en el proceso a lograr que el Juez llegue al convencimiento de que procede la condena. Para ello es instrumento esencial la fase de prueba. El hecho de ser codemandado no le obliga a sostener en el proceso las mismas peticiones que aquellos que se han visto colocados en su misma posición procesal. Por tanto, el litisconsorte que entiende que procede su condena junto con la de los demás codemandados sólo puede *coadyuvar “de facto”* con el actor, realizando alegaciones desfavorables tanto para él como para los demás codemandados, y demostrando la certeza de tales alegaciones en la fase de prueba. De ahí que la negativa injustificada a la práctica de prueba por parte del juzgador de instancia suponga sin duda una lesión de los derechos procesales de la parte, generadora de indefensión (art. 238.3 LOPJ), y que motiva la nulidad de lo actuado a partir de ese momento.

No se trata por tanto, y como parece sostener el propio demandado-recurrente, de que tenga un “derecho a la prueba consecuente a su allanamiento”. Más bien lo contrario: tiene derecho a la prueba precisamente por la ineficacia de su allanamiento, que obliga a la prosecución del proceso.

En conclusión, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca viene a ratificar el derecho de un litisconsorte necesario a proponer y practicar pruebas con independencia de los demás, incluso en contra de sí mismo y de los demás codemandados.

Lo cual deja abierta otra importante cuestión: la de la condena en costas. Dado que en estos supuestos uno sólo de los litisconsortes no puede provocar un allanamiento eficaz, no puede evitar con ese allanamiento su condena en costas (art. 523 III LEC): de hecho, la Sentencia dictada en primera instancia condenó en costas al demandado allanado “por su mala fe”. Esto, en ciertos casos, no dejará de ser injusto, pues su actividad en el proceso se ha dirigido al sostenimiento de la posición del actor y, en caso de que se dictara sentencia de condena, no podría decirse que “sus pretensiones hubieren sido totalmente rechazadas” (art. 523 I LEC), sino más bien lo contrario. Tal vez sería éste un supuesto en que el Juez debería apreciar “la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición” (art. 523 I *i.f.* LEC).

No queremos concluir este comentario sin hacer referencia, aunque sea somera, a la cuestión de si el demandado-allanado que fue condenado tiene el suficiente gravamen para recurrir. Puede pensarse que, habiendo obtenido lo que pedía -su condena- no puede considerarse perjudicado por la sentencia de primera instancia. Sin embargo, no creemos que esto pueda ser así: de un lado,

con su allanamiento -ineficaz, como ya hemos señalado- manifiesta su voluntad de que los tres codemandados sean condenados, pero no la de ser condenado en exclusiva; de otro, y tratándose de una obligación solidaria, su condena en exclusiva y la absolución de los restantes demandados supone privarle de su derecho a repetir posteriormente de los restantes obligados solidarios la cuota correspondiente (art. 1145 II CC), pues la eficacia positiva de la cosa juzgada material impediría que aquéllos, ya absueltos en el primer proceso, pudieran ser condenados en un proceso posterior. Aunque tal cuestión no fue objeto expreso del debate en segunda instancia, creemos que la Sentencia de primera instancia produjo al allanado-condenado un perjuicio que le legitima para recurrir en apelación.